



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-006-2019-00556-01 (O2-22-059)
Demandante: RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRÍGUEZ
Demandada: COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No.144 DEL 18 DE JULIO DE 2022
Asunto: RETROACTIVO PENSIONAL E INTERESES DE MORA

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-006-2019-00556-01 (O2-22-059), promovido por RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRÍGUEZ en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., con el fin de resolver los Recursos de Apelación interpuestos por la parte actora y Colpensiones, contra la sentencia que selló la primera instancia proferida el 20 de enero de 2022 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, "Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones", se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRÍGUEZ, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. a fin de obtener el reconocimiento del retroactivo pensional entre el 05 de febrero de 2018 y la fecha del

reconocimiento de la pensión de vejez, el reconocimiento y pago de los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, en subsidio, la indexación y las costas del proceso. Como fundamento de las pretensiones formuladas, señala que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el día 15 de agosto de 2018, la cual le fue reconocida mediante la resolución SUB 331159 del 27 de diciembre de 2018; no obstante, frente a tal resolución interpuso los recursos de Ley, los que desató mediante la Resolución SUB 69951 del 21 de marzo de 2019, ordenando la reliquidación sobre la base de 1.677 semanas, y que solicitó el pago del retroactivo pensional y los intereses de mora.

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda se admitió mediante auto del 12 de noviembre de 2019 (carp.01, doc.01, pág. 58 a 59), notificado a COLPENSIONES E.I.C.E., el 15 de noviembre de 2019 (carp.01, doc.01, pág. 60), a la AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO el 19 de noviembre de 2019 (carp.01, doc.01, pág. 61 a 62).

COLPENSIONES E.I.C.E. radicó contestación el 10 de diciembre de 2019 (carp.01, doc.01, pág. 63 a 69), escrito en el que admitió los hechos de la demanda, con excepción de la fecha a partir de la cual el demandante tiene derecho al disfrute de la pensión de vejez. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo que el demandante no acreditó el retiro del sistema y por tanto no tiene lugar al retroactivo pensional y excepcionó de mérito, la inexistencia de la obligación de pagar retroactivo pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

La controversia se dirimió en primera instancia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 20 de enero de 2022 (carp.01, doc. 06 y 07), mediante sentencia con la que declaró que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional, ordenando a Colpensiones a reconocer y pagar las mesadas pensionales causadas entre el 01 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, incluyendo la mesada adicional de noviembre (sic) y autorizándola a descontar el 12% para el sistema de salud; ordenó la indexación del valor del retroactivo pensional, desde enero de 2019 y hasta su pago efectivo y condenó en costas del proceso a Colpensiones.

1.3. Recurso de Apelación

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de alzada por el gestor judicial del litigante por activa (min. 40:10, doc. 06), en orden a que se modifique la sentencia de instancia en lo atinente a la negativa de conceder los intereses moratorios, en cuyo sustento señala que el empleador remitió la desafiliación correspondiente, interponiendo los medios de impugnación contra las resoluciones denegatorias de tal prestación, además de haberse solicitado en el libelo inaugural.

A su turno, la gestora judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. (min. 43:45, doc. 06), también interpuso recurso de apelación, en orden a que se revoque la condena en costas, en tanto dicha condena no es una sanción, aduciendo que obró de buena fe y contestaron en forma oportuna las solicitudes formuladas por la parte actora.

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la referida entidad.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

El 28 de febrero de 2022 (carp.02, doc. 02) se admitió el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta antes descrito, y mediante proveído del 07 de marzo del mismo año (carp.02, doc.03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran alegatos de conclusión por escrito, traslado que el apoderado judicial del litigioso por activa describió el 09 de marzo de 2022 (carp.02, doc.04), en el sentido de traer a colación lo discurrido en sentencia SL5603-2016 por la Corte Suprema de Justicia, relativa al reconocimiento de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La poderhabiente judicial de COLPENSIONES, radicó sus alegatos de conclusión el 11 de marzo de 2022 (carp.02, doc.05), con el objeto de que se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto a las condenas impuestas, aduciendo que la causación de la pensión opera cuando el afiliado acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la prestación, mientras que el disfrute opera como consecuencia de la causación del derecho, pero condicionada al retiro o desafiliación efectiva del sistema general de pensiones, a lo cual aduce que en el caso del demandante, este continuó cotizando hasta

el mes de abril de 2018, reconociéndosele al demandante la prestación a partir de la fecha de inclusión en nómina por no presentar novedad de retiro a la fecha de solicitud. En cuanto a la condena en costas, expresa que en varios pronunciamientos de las altas cortes se ha pregonado que solo resulta posible condenar en costas a una parte cuando esta ha producido un notorio abuso del derecho de acceso a la justicia por el ejercicio del derecho de acción o de defensa, de la facultad de interponer recursos o promover incidentes, habiendo obrado la entidad de buena fe y según el ordenamiento jurídico y el ámbito de sus funciones.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto tanto por el extremo litigioso por activa como por pasiva, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, al igual que se revisará en su integridad, bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si el señor RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRIGUEZ, causó el derecho al reconocimiento del retroactivo de la pensión de vejez, y a los intereses de mora, efecto para el que será necesario establecer, cuál es el momento en el que se origina el derecho al disfrute de la pensión de vejez, y si COLPENSIONES E.I.C.E. incurrió en mora respecto del pago de las mesadas pensionales; adicionalmente, si la condena en costas impuesta a Colpensiones se encuentra ajustada a derecho.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión de primer grado en cuanto al retroactivo pensional, en razón a que la voluntad que el actor tenía de retirarse del sistema se infiere del cese en el pago de las cotizaciones, del retiro del subsistema de pensiones realizado por su empleador en el periodo abril de 2018, y del reconocimiento de la prestación petitionado desde el 15 de agosto de 2018; así mismo, se confirmará el fallo de instancia en cuanto a la condena en costas impuesta a Colpensiones, pero se revocará en cuanto a la absolución por los intereses de mora, pues

los mismos se causan en virtud del retardo sin asidero legal o por criterio jurisprudencial en el reconocimiento y pago del retroactivo pensional.

2.3. Solución de los Problemas Jurídicos Planteados

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, debe señalarse que no existe controversia sobre los siguientes hechos: que el señor RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRIGUEZ nació el 05 de febrero de 1956 (carp.01, doc.01, pág. 16), cumpliendo por tanto los 62 años de edad el 05 de febrero de 2018; para aquel entonces habiendo cotizado más de 1300 semanas (carp.01, doc.01, pág. 71 a 83); realizó aportes ante el Sistema General de Pensiones hasta el 30 de abril de 2018 (carp.01, doc.01, pág. 71 a 83); COLPENSIONES E.I.C.E. le reconoció la pensión de vejez a partir del 01 de enero de 2019, por valor de \$7.505.919 mensuales a través de la Resolución SUB 331159 del 27 de diciembre de 2018 (carp.01, doc.01, pág. 18 a 26), y que el demandante solicitó, mediante la interposición del recurso de apelación, el reconocimiento de las mesadas retroactivas, los intereses reclamados y la reliquidación de la pensión, solicitud resuelta mediante la resolución SUB 69951 del 21 de marzo de 2019, mediante la cual se reliquidó la mesada pensional en la suma de \$ 7.789.477, manteniendo la fecha del reconocimiento y sin emitir pronunciamiento respecto de los intereses de mora (carp.01, doc.01, pág. 28 a 38), decisión que fue confirmada mediante la resolución DPE 5177 del 26 de junio de 2019 (carp.01, doc.01, pág. 40 a 47) y que el empleador Carton de Colombia efectuó su retiro del subsistema de pensiones para el periodo de cotización abril 2018 (carp.01, doc.01, pág. 56).

2.3.1. La causación y disfrute de la pensión de vejez

El Sistema General de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, del que disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (Preámbulo de la Ley 100 de 1993).

Desde la arista de su finalidad, el Sistema General de Pensiones fue diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica denominada pensión sufragada por la entidad administradora de pensiones del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado.

Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida que pretendan acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, deben acreditar, una edad mínima de 57 años, las mujeres, o de 62 años, los hombres, y desde el año 2015, una densidad de semanas igual o superior a las 1.300; sin embargo, lo cierto es que, para disfrutar del pago de dicha prestación, es necesario, además de reunir los requisitos de edad y tiempo de cotización antes descritos, que se produzca la desafiliación al Sistema General de Pensiones (artículo 13 y 36 del Decreto 758 de 1990), acto jurídico que no se deduce de la simple cesación en el pago de los aportes, en vista que, al margen de que el afiliado consolide el derecho a la pensión de vejez en determinado momento, el ordenamiento jurídico le permite seguir cotizando con el propósito incrementar el monto de la mesada pensional (CSJ SL-15091 del 09-09-2015, Radicado 41016).

Y es que la falta de cotizaciones no supone necesaria e imperiosamente la desafiliación del sistema, "*... porque la afiliación al sistema se mantiene así no existan cotizaciones, de modo que se trata de figuras jurídicas que, aunque íntimamente vinculadas y complementarias, son distintas [...] La afiliación, es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél, de tal suerte que la pertenencia al sistema de seguridad social está determinada por la afiliación y en ésta encuentran veneno todos los derechos y obligaciones, consagrados a favor y a cargo de los afiliados y de las administradoras o entes gestores. La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia al sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, justamente, de la afiliación. Mientras que la afiliación ofrece una pertenencia*

permanente al sistema, ganada merced a una primera inscripción, la cotización es una obligación eventual que nace bajo un determinado supuesto, como lo es la ejecución de una actividad en el mundo del trabajo o el despliegue de una actividad económica. A partir de esa distinción, brota espontánea una conclusión: la afiliación al sistema de seguridad social, en ningún caso, se pierde o se suspende porque se dejen de causar cotizaciones o éstas no se cubran efectivamente". (SL-6035, del 04-03-2015, Radicado 49194, reiterada en la SL-5515 del 20-04-2016, Radicado 42350).

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia ha admitido algunas excepciones a la obligación de desafiliación formal del sistema para entrar a disfrutar de la pensión de vejez, así, por ejemplo, cuando de la conducta del afiliado se colige su intención de cesar definitivamente las cotizaciones al sistema, eventos en los que se ha considerado que el trabajador no tiene por qué asumir la pretermisión de la desafiliación del empleador (CSJ SL del 20-10-2009, Radicado 35605, SL-4611 del 11-03-2015, Radicado 56171, SL-5603 del 06-04-2016, Radicado 47236, SL-11895 del 12-07-2017, Radicado 47129, SL-415 del 21-02-2018, Radicado 64761, SL-4360 del 09-10-2019, Radicado 68852, SL-2555 del 01-07-2020, Radicado 79733, SL-1302 del 03-03-2021, Radicado 72795).

Entonces, si bien la regla general sigue siendo la desvinculación del sistema como requisito necesario para el disfrute de la pensión, existen circunstancias especiales que ameritan reflexiones igualmente particulares y que deben ser ponderadas, tales como, el cumplimiento de la edad mínima, la acreditación de la densidad de semanas exigidas, la cesación en las cotizaciones, y la radicación de la solicitud para el reconocimiento prestacional.

En orden a dirimir este aspecto de la controversia, la Sala encuentra acreditado que el señor RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRIGUEZ, nació el 05 de febrero de 1956, y arribó a los 62 años de edad, el mismo día y mes de año 2018, fecha para la que contaba con más de 1.300 semanas cotizadas; dejó de efectuar cotizaciones al Sistema General de Pensiones desde el 30 de abril de 2018, que su último empleador reportó la novedad de retiro al subsistema de pensiones en el periodo abril de 2018, y que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 15 de agosto de 2018, presupuestos con base en los que se colige que la desafiliación al sistema del actor, se produjo con la cesación en el pago de aportes y la desafiliación al subsistema de pensiones, que se itera, se produjo el 30 de abril de 2018.

Conforme lo expuesto, esta Corporación confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto ordenó el pago de las mesadas causadas entre el 01 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, mismas que ascienden a la suma de \$67.944.65 como se desprende de la liquidación aneja a la presente sentencia, valor sobre el que, tal y como acertadamente lo adujo la a

quo, COLPENSIONES E.I.C.E. se encuentra autorizada para descontar los aportes correspondientes para el Sistema General de Salud.

Finalmente, se advierte que sobre las mesadas antes descritas no ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, habida cuenta que, entre la fecha de su causación, 05 de febrero de 2018, la fecha de su reclamación, 15 de agosto de 2018, y la fecha de radiación de la presente acción, 28 de agosto de 2019, no transcurrieron los tres años de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

2.3.2. Los Intereses de Mora

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, consagró el derecho al reconocimiento y pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, los cuales (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran su imposición, siempre y cuando haya razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales (CSJ SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

En cuanto a la fecha a partir de la cual se hacen exigibles, la jurisprudencia ha enfatizado reiteradamente que los citados intereses comienzan a causarse desde la fecha en la que empieza el retardo del pago del beneficio pensional, por lo que se debe precisar que solo es dable hablar de retardo cuando se ha incumplido con el término establecido en la Ley para el reconocimiento de la prestación, que es de cuatro meses en tratándose pensiones de vejez, según lo previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 (CSJ SL del 15-05-2008, Radicado 33233; SL del 17-04-2012, Radicado 42488, SL-1023 del 17-03-2021, Radicado 81812).

En lo que respecta al tiempo con el que contaba COLPENSIONES E.I.C.E. para resolver la solicitud de reconocimiento pensional radicada por la demandante, la Sala reliva que, de conformidad con lo indicado en el inciso final del párrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 *“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”*, y que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia pacíficamente ha reiterado *“... que los intereses moratorios proceden a partir del día siguiente al vencimiento de los 4 meses que confiere la ley 100 de 1993 para resolver la solicitud”* (CSJ SL-4985 del 05-04-2017, radicado 49082; SL-3130 del 19-08-2020, radicado 66868; SL-3552 del 28-07-2021, radicado 59174).

Así las cosas, y extrapolando los lineamientos jurisprudenciales esbozados al asunto que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que, transcurrieron más de cuatro meses desde la fecha en que la actora solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, el 15 de agosto de 2018, sin que la entidad accionada reconociera y pagara el retroactivo pensional o adujera y probara la existencia de una razón atendible que la liberaría de tal condena, pues contrario a lo aducido por la cognoscente de instancia el demandante no solo dejó de efectuar cotizaciones, sino que su empleador reportó la novedad de retiro al subsistema de pensiones, desde el 30 de abril de 2018 (carp.01, doc. 01, pág. 56, 71 a 83), y siendo ello así, lo procedente es revocar el fallo de primer grado, en cuanto absolvió al ente de seguridad social encausado del reconocimiento y pago de los intereses deprecados, para en su lugar, ordenar el pago de los mismos a partir del 16 de diciembre de 2018, es decir, cuatro meses después de la fecha de reclamación de la prestación económica y hasta que se verifique el pago total de la obligación, los cuales deberán calcularse sobre el valor que efectivamente se cancelará a la demandante, esto es, sin que previamente se descuenten los aportes para el Sistema General de Salud, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Adicionalmente, se denota que la disposición normativa a la que se viene haciendo referencia (artículo 33 de la Ley 100 de 1993), no ha sido derogada ni modificada por el legislador, por lo que, aplicar las previsiones del artículo 4º de la Ley 700 de 2001, contrariaría el principio de favorabilidad que consagran los artículos 53 de la CP, y 21 del CST, y del cual se deriva la obligación de preferir la situación más favorable trabajador, beneficiario o pensionado, en caso de duda sobre la aplicación de una norma, o sobre su interpretación jurídica, lo cual, siguiendo la inveterada e iterativa doctrina desarrollada en la jurisprudencia laboral es correspondiente al principio general del derecho conocido como *in dubio pro operario*.

4. COSTAS

En cuanto a la condena en costas, impuesta en primera instancia debe indicar esta Sala que al margen del monto de la condena que no puede ser objeto de estudio en esta sentencia, se tiene que la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia memorando lo expuesto en la sentencia SL4959-2016, resaltó que su objeto es “resarcir los perjuicios causados o reembolsar los gastos ocurridos por la actividad de los litigantes” (SL756-2022), de suerte tal que, la condena se impone como consecuencia de la oposición que ejerce la parte demandada a las pretensiones que han salido avantes, no siendo del caso mirar en este punto, la buena o mala fe con la que actuó la entidad, pues se itera, la finalidad es resarcir los perjuicios o costes en los que incurrió la parte que salió vencedora en el juicio, y en esa medida, se confirmará la condena en costas impuesta en primera instancia.

En cuanto a las de segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, y advirtiéndole que el recurso de apelación de la parte demandante fue resuelto en favor de las pretensiones del litigioso por activa y que la decisión de primer grado fue revisada en el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 20 de enero de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por RUBÉN DARÍO CASTAÑO RODRIGUEZ en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., para en su lugar, ordenar el pago de intereses moratorios en favor del demandante, los cuales deberán liquidarse sobre el retroactivo concedido, con la tasa de interés moratorio máxima vigente al momento del pago y a partir del 16 de diciembre de 2018.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO en cuanto a que el retroactivo generado entre el 01 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 equivale a la suma de \$ 67.944.653,00.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL 2550 de fecha 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
Magistrado



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

2018	3,18%	\$ 7.549.405,89	9	\$ 67.944.653
2019		\$ 7.789.477,00		\$ 0

TOTAL	\$ 67.944.653
-------	---------------